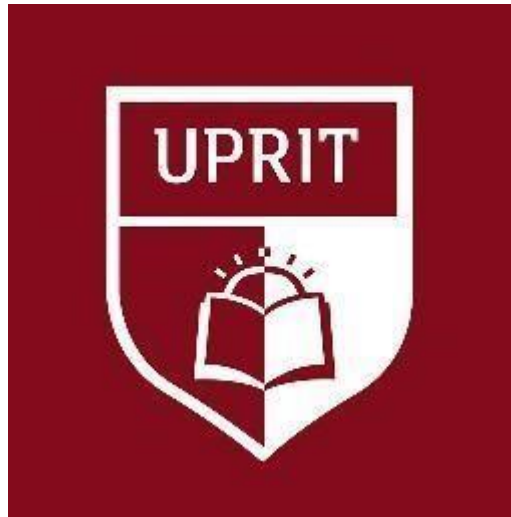


UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO



FACULTAD DE DERECHO

**“EFICACIA EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN
EL DELITO DE OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR EN LA FISCALIA
PROVINCIAL MIXTA CORPORATIVA – HUAMACHUCO PROVINCIA DE
SANCHEZ CARRION, REGION LA LIBERTAD 2014 – 2018”**

Tesina (Trabajo de Investigación)

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN DERECHO

AUTOR

ROGER LUIS ASTO SIFUENTES

ASESOR

DR GUILLERMO ALEXANDER CRUZ VEGAS

TRUJILLO - PERU

2019

INDICE

I. INTRODUCCIÓN	06
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA	06
1.2.- ANTECEDENTES	08
1.3.- ENUNCIADO DEL PROBLEMA	11
1.4.- HIPÓTESIS	12
1.2.- MARCO TEÓRICO	12
1.2.1.- NOCIÓN DE CRITERIO DE OPORTUNIDAD	12
1.2.2.- EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	13
1.2.3.- ANTECEDENTES	13
1.2.4.- PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD	15
1.2.5.- NOCIÓN DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	15
1.2.6.- OBJETIVO DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	16
1.2.7.- EL ACUERDO REPARATORIO	18
1.2.8.- CONEXIÓN DEL SISTEMA PENAL	24
1.2.9.- PERSECUCIÓN DEL DELITO	25
1.3.- REGLAMENTO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y ACUERDO REPARATORIO 2018	26
1.3.1.- BASE LEGAL DEL PRESENTE REGLAMENTO	27
1.4.- DELITO DE OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR	27
1.4.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS	27
1.4.2.- ASISTENCIA FAMILIAR	28
1.4.3.- DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR	30
1.4.4.- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS COMO DELITO	31
1.4.5.- CONDUCTAS TÍPICAS DE LA OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR	32
1.4.6.- EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL HIJO QUE ADQUIERE COMPROMISO DE CONVIVENCIA	36
1.4.7.- OMISIÓN DE PRESTAR ALIMENTOS	40
2.1.- OBJETIVOS	42
2.1.1.- OBJETIVO GENERAL	42
2.1.2.- OBJETIVO ESPECÍFICO	42
3.1.- DISEÑO DE INSTRUMENTACIÓN	42
3.1.1.- MATERIAL U OBJETO DE ESTUDIO	42

3.1.2.- POBLACION	43
3.1.3.- MUESTRA	43
4. 1.- METODOS Y TECNICAS	43
5. 1.- ANALISIS Y PROCEDIMIENTO DE LOS DATOS	44
6. 1.- OPERACIONALIZACION DE VARIABLES	44
III.- RESULTADOS	45
IV.- DISCUSIÓN	45
V.- PROPUESTA OPCIONAL	45
VI.- CONCLUSIONES	46
VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	46

RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado “EFICACIA EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DELITO DE OMISION DE

ASISTENCIA FAMILIAR EN LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA CORPORATIVA – HUAMACHUCO PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION,

REGION LA LIBERTAD 2014 – 2018” es de suma importancia, ya que aborda la

temática de la eficacia en la aplicación del principio de oportunidad en la comisión del delito de Omisión a la Asistencia Familiar, constantemente arraigado desde ya en nuestro país, así como también es un tema poco estudiado e investigado en el Perú.

Y dando lugar a las dudas de este delito que día a día se produce en el país, se colige pues que es el delito de “Omisión a la Asistencia Familiar”, y la aplicación del principio de oportunidad, que al ser temas es de suma importancia, nos permite que el proceso penal concluya de una manera rápida y disminuya la carga procesal en la

Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huamachuco de la Provincia de Sánchez Carrión, Región La Libertad.

En razón a esto que en el presente trabajo de investigación, se determinara que aplicando el “Principio de Oportunidad” en el delitos de omisión a la asistencia familiar, si se ayudaría a solucionar el conflicto penal que se materializa por el incumplimiento de la obligación alimentaria de padres a hijos, en razón de que esta desde ya se encuentra reconocida en sentencia consentida o ejecutoriada firme que determina la obligatoriedad de dicha prestación alimenticia y que al incumplirse por el sujeto agente infractor (pater familia) se tipifica la comisión del antes citado delito.

ABSTRACT

The present research work entitled "**EFFECTIVENESS IN THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF OPPORTUNITY IN THE CRIME OF OMISSION OF**

FAMILY ASSISTANCE IN CORPORATE MIXED PROVINCIAL FISCALIA - HUAMACHUCO PROVINCE OF SANCHEZ CARRION, REGION LA

LIBERTAD 2014 - 2018" is of utmost importance, since It addresses the issue of effectiveness in the application of the principle of opportunity in the commission of the crime of Omission to Family Assistance, which is constantly rooted in our country, as well as a topic that has not been studied and researched in Peru.

And giving rise to the doubts of this crime that occurs every day in the country, it is inferred that it is the crime of "Omission to Family Assistance", and the application of the principle of opportunity, which is a matter of importance, allows us to quickly conclude the criminal process and reduce the procedural burden in the Huamachuco

Joint Mixed Provincial Prosecutor's Office of the Province of Sánchez Carrión, La Libertad Region.

Because of this, in the present research work, it was determined that by applying the "Opportunity Principle" in the crimes of omission to family assistance, if it would help to solve the criminal conflict that is materialized by the breach of the food obligation from parents to children, because it is already recognized in a final consent or enforceable judgment that determines the compulsory nature of such maintenance and that violated by the infringing agent (**pater family**) is typified the commission of the aforementioned crime .

I.- INTRODUCCION

1.1.- REALIDAD PROBLEMÁTICA

Los problemas relativos al derecho de familia se han incrementado de forma significativa, llegando incluso a tipificarse algunas conductas como: La “Omisión a la Asistencia Familiar” y como consecuencia de ello en el contexto del presente trabajo de investigación, es denotativo precisar que la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Sánchez Carrión y los Juzgados de Familia o Mixtos de Huamachuco, han visto incrementarse la carga procesal, generando con eso la demora en tramitar todos los procesos a su cargo, llegando incluso a afectarse derechos fundamentales como el acceso a la justicia o a un proceso rápido o célere, que en esencia es lo que todo ciudadano necesita para así poder ver solucionado sus conflictos jurídicos, es por eso que en el presente trabajo se trata de determinar si la aplicación del principio de oportunidad en el delitos de omisión a la asistencia familiar durante el año 2014 al 2018 en adelante en la provincia de Sánchez Carrión, es eficaz, entendiendo que es fundamental un proceso rápido en un estado constitucional de derecho.

Nuestro sistema procesal penal a través del tiempo se ha tornado ineficaz, por los mínimos recursos de los que dispone; hacia procesar todos los casos penales bajo su competencia. Esto sobrelleva, por ejemplo, a la duración extraordinaria de todos los procesos penales, induciendo una distorsión cronológica de los plazos procesales, y creando incluso que la afectación a los bienes jurídicos considere disminuir ante la *antigüedad* de los procedimientos.

Siendo así, conocemos que el sistema penal aplica a través de proceso de criminalización primaria y secundaria. La criminalización primaria se confirma mediante decisiones político-criminales encaminadas a la agravación de ejemplos penales ya existentes como al espacio de nuevas figuras criminales. La criminalización secundaria, entre otros factores, examina la actividad de los órganos de control penal encaminado a la aplicación de las normas penales sustantivas y adjetivas.

En nuestro país, la envoltura - criminalización primaria muestra a una reiterada experiencia del legislador orientada a la aplicación del poder penal, allí donde otras formas de control social consiguen obtener mejores resultados y mayor seguridad en la solución de los conflictos. La manera del Estado de crear del Decreto Penal la *primera ratio* del control social, sobrelleva a la amplificación en la creación de tipos penales y a la agravamiento de los comportamientos ya criminalizados, lo cual empeora la problemática de la cantidad de causas por resolver, que se manifiesta en aproximadamente sesenta por ciento (60%) de la totalidad de las causas.

En este contexto de situación aparece el “Principio de Oportunidad”, como una forma de corregir partes de esas disfunciones que muestra el sistema jurídico Penal Peruano. En efecto, la apología en la incorporación de esta figura es la de ser un mecanismo de simplificación procesal; es decir, *si la aplicación del principio de oportunidad ha influido en la solución de conflicto en los delitos de omisión de asistencia familiar de padres a hijos*, en la provincia de Sánchez Carrión y que por

ende han sido tratado o encausados ante la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huamachuco.

Superando los diez años de vigencia en nuestro país, en Huamachuco durante los años comprendidos entre el 2014 al 2018, se presentaron más de 100 denuncias por la comisión del delito de “Omisión a la Asistencia Familiar”, de las cuales acorde al referente que se acompaña en anexos más de 20 denuncias concluyeron con la aplicación del “Principio de Oportunidad” incoado por el fiscal de investigación preparatoria de la zona.

1.2.- ANTECEDENTES

Han sido investigaciones provenientes de España, las que se han encargado de analizar la eficacia del principio de oportunidad como mecanismo, destinado a la simplificación y disminución de la carga procesal.

A nivel internacional.

ARMENTA, D (1991), en su investigación *“CRIMINALIDAD DE BAGATELA Y PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD”*. Presentada ante la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, Alemania- España. Que concluye: debido a la inconsecuente penalización de conductas de mínima gravedad, se requiere de una institución procesal que simplifique su investigación y juzgamiento, como lo es el principio de oportunidad; caso contrario, el sistema judicial colapsará, y no por hechos de gran importancia, sino por delitos considerados de *bagatela*

Por otro lado, está el estudio del autor Conde. (1983) Magistrado del Tribunal Supremo Español, quien en una investigación dirigida a los Fiscales y Jueces

Penales españoles en 1983, titulada: **LEGALIDAD VERSUS OPORTUNIDAD COMO CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE LOS MINISTERIOS**

PÚBLICOS, concluye que: La admisión irreflexiva de que ante toda presunta comisión delictiva le continúa un procedimiento de investigación, juzgamiento

Según Calderón (2001) , “éste principio alcanza un gran desarrollo en los principales Estados Europeos, refiriendo que nuestro país adopta el sistema centro europeo, que considera la aplicación del principio de oportunidad como excepción; fue introducido a nuestro ordenamiento jurídico mediante el Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N° 638 publicado el 27 de abril de 1991), cuyo artículo 2°, modificado por la Ley N° 28117 (10 de diciembre de 2003) prescribe los supuestos en los que se puede aplicar dicho instituto. En un primer momento se emitieron disposiciones como la Circular N° 006-95-MP-FN (1995), a fin que las Fiscalías Provinciales que conocieran casos de índole penal, aplicaran el principio de oportunidad de la forma en que estimasen conveniente

Posteriormente, creadas, como plan piloto, las Fiscalías Provinciales Especializadas en la aplicación del Principio de Oportunidad, rigieron sus funciones en base a la Resolución del Consejo Transitorio N° 200-2001-CT-MP

(20 de abril de 2001), modificada por la Resolución del Consejo Transitorio del Ministerio Público N° 266-2001-CT-MP (27 de abril de 2001) y por la

Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 651-2001-MP-FN (19 de junio de

2001).

Finalmente, fue devuelta la competencia a todas las Fiscalías Provinciales Corporativas Penales o Mixtas para aplicar el “Principio de Oportunidad”, desarrollándose el procedimiento de acuerdo a lo establecido en la **Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1470-2005-MP-FN (12 de julio de 2005)** y su Anexo, **Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1470-2005-MP-FN (22 de julio de 2005), modificado por Fe de erratas (07 de agosto de 2005) y complementado con la Resolución de la Gerencia General de la Fiscalía de la Nación N° 398-2005-MP-FN-GG. (10 de agosto de 2005).**

Y, para evitar sanción, sin que se conlleve a desconocer la actual política criminal en materia de administración justicia, la cual, postula la necesidad de mecanismos tendientes a evitar la sobre congestión tanto procesal como penitenciaria. Es decir, la actual carga no permite una observancia irrestricta de la legalidad procesal, sino que exige mecanismos de flexibilización como es el principio de oportunidad.

A nivel Nacional

CARHUAYANO. D (2017), en su trabajo de investigación “*EL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACION ALIMENTARIA Y SU INFLUENCIA EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD*”. Universidad Norver Wiener. Lima. La autora, en una de sus conclusiones señala “que en la actualidad la norma requiere de una reformación y que esta manera se permia a los operadores jurídicos y la comunidad en general pueda tener una visión más amplia de los que a la fecha puede existir o se puede entender....que en pocos procesos se aplican el proceso de oportunidad, en muchos casos por falta del dinero del procesado o pero la mayor cantidad de las personas indicaron que no lo solicitan por desconocimiento de este principio.”

MONAGO.C (2015), en su trabajo de investigación “*DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA Y LA CARGA*

PROCESAL EN LA SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL

CORPORATIVA DE HUÁNUCO 2014-2015”. Universidad de Huánuco. Perú.

El autor, en una de sus conclusiones señala: “El procedimiento penal a nivel del Ministerio Público sobre el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, proceden de dos fuentes el primero como consecuencia de la liquidación judicial de alimentos devengados con el 83% y de las obligaciones asumidas en actas de conciliación extrajudicial sobre alimentos el 17%.

Dado estas denuncias penales el representante del Ministerio Público invoca fundamentalmente al denunciado a acogerse a la institución procesal de principio de oportunidad de los 100% invocados sólo se acogieron el 30% de los casos y el

70 de estos caso prosiguen con la investigación a nivel fiscal.”

1.3.- ENUNCIADO DEL PROBLEMA

¿Es eficaz la aplicación del principio de oportunidad, en la carga procesal de la Fiscalía Penal Mixta Corporativa de Huamachuco, en la perpetración del delito de omisión a la asistencia familiar, durante los años 2014 – 2018?

1.4.- HIPOTESIS

La aplicación del principio de oportunidad sí es eficaz en en la carga procesal de la Fiscalía Penal Mixta Corporativa de Huamachuco, en la comisión del delito de omisión a la asistencia familiar, durante los años 2014 – 2018.

1.2.- MARCO TEORICO

Criterios de Oportunidad

1.2.1.- Noción de Criterios de Oportunidad

*Para el Autor Arana (2012) **Definición:** por muchos años el sistema penal ha sido duramente cuestionado porque no respondía a las necesidades del Estado en cuanto al control punitivo eficaz y oportuno. Es por ello que en las tales circunstancias, debían asumirse criterios de simplificación que permitían corregir los excesos del sistema legal preponderante; permitiendo no solo dar eficacia al sistema si no llegar oportunamente al destinatario de este.*

Con el transcurrir el tiempo las sociedades han ido progresando y comenzaron a instalar y perfeccionar las diversas garantías y derechos de administración de justicia, lo que provoco la formación y la configuración de sistemas procesales; sin embargo y de manera paralela, la densidad poblacional, la pérdida de valores y el incremento de necesidades de consumo, provocaron el aumento de la criminalidad, y con ello, sobre cargaron y congestionaron el desenvolvimiento del sistema; de forma tal que surgió la necesidad de buscar salidas o mecanismos que posibiliten dar solución pronta al conflicto – penal; dentro de los cuales aparecen los criterios

de oportunidad, cuyo sustento no es precisamente el aspecto represivo sino la ausencia de necesidad de reproche penal, (P. 227)

a).- Imposibilidad del Estado de Perseguir y sancionar todo los conflictos;

Según el Autor Arana (2012), Dentro de la solución de simplificación que consiste en la mayor elasticidad del proceso penal para dar paso a la reparación antes que a la sanción que se prevé la terminación anticipada del proceso. El proceso por decreto penal de condena, el procedimiento por colaboración eficaz y el principio de oportunidad, que a nuestro criterio permitirá descongestionar los juzgados y solucionar de manera rápida y eficaz los conflictos. A las instituciones procesales antes indicadas, (P. 228)

1.2.2.- EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

1.2.3.- Antecedentes:

Acota el Autor Arana (2012). El principio de oportunidad tiene su origen en la imposibilidad del estado de intervenir oportuna y eficazmente para la sanción de todo los conflictos derivados de un delito, lo que generaba a su vez la existencia de excesiva carga procesal, por lo que se adoptó soluciones como el “**principio de oportunidad**” que apunta además a

aliviar la carga procesal y tratar de componer los conflictos que ocasiona el delito sin ir hasta el final del proceso.

El principio de oportunidad como salida alternativa de solución del conflicto jurídico penal apareció **en Alemania en el año 1924**, siendo diseñado como mecanismo que facultaba al Ministerio Público a abstenerse de ejercer la acción penal en los casos en que la culpa sea leve y carezca de importancia las consecuencias dañosas del delito, de tal manera que su persecución no afecte al interés público.

Actualmente, el principio de oportunidad viene siendo incorporado en la mayoría de reformas contemporáneas de los ordenamientos procesales penales. Tanto es así que la recomendación N° R-87 del comité del Consejo de Europa aconseja a sus estados miembros incorporar a sus legislaciones este principio.

En el Perú el principio de oportunidad se introdujo por primera vez con el Código Procesal Penal de 1991(D. Leg N° 638), por medio del cual, además de los criterios de oportunidad, se introducen importantes instituciones en nuestra legislación y doctrina, a tono con las nuevas orientaciones del Derecho Procesal moderno.

En la exposición de motivos del decreto Legislativo N° 638, nuestro legislador no ha hecho alusión expresa a la instauración de tal principio, remitiéndose en líneas generales al contenido de la exposición de motivos del comité consultivo del proyecto alternativo de noviembre de 1990, y que

importaba un planteamiento a la limitación de la persecución penal para los delitos considerados de mínima y mediana gravedad. (P. 230 – 231)

1.2.4.- Principio de Oportunidad y principio de Legalidad

Según López (1996). El principio de oportunidad de legalidad enuncia que el Ministerio Público está obligado a iniciar y sostener la persecución penal de todo delito que llegue a su conocimiento, sin que pueda suspenderla, interrumpirla o hacer cesar a su mero árbitro. (P. 231)

Por otra parte el Autor Arana & Maier (1996). Señala que frente a la decisión de oficializar la persecución penal, como regla general, se ha estimado necesario imponer a los órganos del Ministerio Público, el deber de promover la persecución penal (promoción necesaria), ante la noticia de un hecho punible en procura de la decisión Judicial que solucione el caso. (P. 231)

1.2.5.- Noción de Principio de Oportunidad

Para el Autor WILLIAM A & CLAUS ROXIN, el Principio de Oportunidad es la contraposición teórica del principio de legalidad, mediante el que se autoriza al fiscal a optar entre elevar la acción o abstenerse de hacerlo, archivando el proceso, cuando las investigaciones llevadas a cabo conduzcan a la conclusión de que el acusado, con gran probabilidad ha cometido un delito. (P. 232)

Acota el Autor Arana (2012), y Por su parte, el Jurista Peruano CARLOS TORRES CARO, indica más que dar una definición se limita a transcribir el objeto del principio de oportunidad, precisando que es un postulado rector que se le contrapone excepcionalmente al principio de legalidad procesal, corrigiendo su exceso disfuncional, con el objeto de conseguir una mejor calidad de justicia, facultando al fiscal, titular de la acción penal, decidir sobre la pertinencia de no dar inicio a la actividad jurisdiccional penal, (P. 232 - 233)

1.2.6.- Objetivo del Principio de Oportunidad

Según el Autor Arana (2012).

a).- Descongestionamiento del aparato judicial: el principio de oportunidad es un mecanismo expedito llamado a descongestionar el aparato judicial, para caso de delitos leves o de poca monta.

b).- Resarcimiento de la Víctima: de tal manera de que a la víctima ya no le genera perder tiempo y espera todo el tiempo que demanda el desarrollo de un proceso pues la afectada obtenga su reparación de una manera rápida es necesario aplicar el principio de oportunidad y que la víctima obtenga su liquidación de una manera rápida,

c) oportunidad para el imputado: que ya no deberá invertir tiempo y recursos en el proceso, y adicionalmente se evita la posibilidad de que el imputado reciba una condena y tenga antecedentes penales. (P. 233)

d).- Modelo de Principio de Oportunidad libre (Angloamericano)

Para el Autor Arana (2012). Acota que en este sistema, la aplicación del principio de oportunidad es una regla. Sistema en que el fiscal es el que decide si investiga si la inicia formalmente, si garantiza inmunidad al imputado, si negocia con este, cargo formula, cuando o donde los formula etc.

Este sistema se preocupa por obtener la declaración de culpabilidad del imputado a fin de evitar procesos largos, pudiendo ser esta voluntaria, estructuralmente inducida y negociada. Es voluntaria cuando la culpabilidad del imputado es evidente y así mismo cuando el imputado reconoce su falta por eso el fiscal utiliza el principio de oportunidad para llegar a un acuerdo con el imputado con su representante legal, sobre la pena y el delito

Este sistema es aplicado por los países anglosajones, principalmente los Estados Unidos. (p. 234)

e).- Sistema de Oportunidad reglado (centro – europeo)

Menciona el Autor Arana (2012). Que en este sistema la aplicación del principio de oportunidad constituye una excepción, pues la regla es la legalidad.

En este sistema los casos están estrictamente regulados por la ley.

f).- Supuestos en los que es posible aplicar el principio de oportunidad.

Según el artículo 2 inciso 1 del NCPP, el Ministerio Público, de oficio o de pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal y se aplicará a los delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años de pena privativa de libertad.

Frente a este problema, no existen referencias normativas expresas ni en el NCPP ni en otras normas especiales, y en tal caso, corresponde al fiscal discrecionalmente evaluar si un determinado delito afecta o no afecta el interés público y si lo afecta gravemente, pues de estimar que el delito si afecta gravemente el interés público, no podrá aplicar el principio de oportunidad. (P.

234 – 236)

1.2.7.- EL ACUERDO REPARATORIO

Según el Autor Arana (2012),

a).-Supuestos en los que es posible aplicar el acuerdo reparatorio

De conformidad con el inciso 6 del artículo 2 del NCPP, independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) procederá un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículos 122, 185, 187, 189-A primer párrafo, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 205, 215, del código penal.

b).- trámite para la aplicación del acuerdo reparatorio

A diferencia del principio de oportunidad que opera como una facultad del fiscal para obtenerse del ejercicio de la acción penal o para desistir de una persecución, el acuerdo reparatorio opera como una obligación del fiscal, quien por mandato operativo del artículo 2 inciso 6 del NCPP, de oficio o a pedido del imputado o de la Víctima, pondrá un acuerdo reparatorio. (P. 246)

Selección de Conductas Típicas Relevantes para la Aplicación del Principio de Oportunidad

a).- Propósito de la Investigación

Acota el Autor Diego (2012). Se propone un modelo de análisis para apreciar de qué manera el nuevo código procesal penal peruano establece que deben seleccionarse los supuestos de aplicación del principio de oportunidad, reconociendo las estructuras involucradas y sus interrelaciones con el sistema de penas, a fin de sustentar la hipótesis de que dicho mecanismo no legitima ni autoriza el uso discrecional de las facultades del ministerio público, cuando se trata de abstenerse o de ejercer la acción penal, reduciendo al mínimo los espacios en los que se le permite un mayor margen de apreciación, a través de conceptos determinados e indeterminados

b).- Preliminares

La ley es un instrumento que permite identificar con anticipación señalados aspectos de la realidad, a los que asignan consecuencias específicas en este sentido, es la columna vertebral que da consistencia al principio de oportunidad. Para ello precisa construir una representación, a partir de a las características y

relaciones más importantes de los antes del mundo (incluido el propio sistema penal), sobre los que busca intervenir.

c).- Conceptos determinados

Los medios intelectivos a los que acude con este propósito son los conceptos, que a veces permiten asir los objetos, en forma precisa e inequívoca (conceptos determinados).

Cuando este sucede, la aplicación de las normas se consume en constatar la correspondencia, o disimilitud, entre la representación y el objeto que se examina, es decir, un juicio disyuntivo, caracterizado por la contraposición excluyente fuera y dentro del ámbito de significación del concepto

En el derecho norteamericano este tipo de conceptos son denominados *bright line rule*, se compone de factores objetivos y están caracterizados por la taxatividad de los supuestos de hechos y circunstancias del caso sin margen para que la agencia estatal encargada de su aplicación, pueda apreciarlos o graduar sus consecuencias.

d).- Conceptos Indeterminados

No obstante es frecuente que los conceptos solo permitan una aproximación imprecisa debido a la naturaleza en estos casos la determinación exacta del objeto solo es posible al momento de aplicarse la norma, tarea que normalmente

corresponde a una agencia estatal distinta a la que diseño el dispositivo normativo.

Un concepto indeterminado puede generar relaciones significativas claras y precisas pero de signo inverso que permiten incluir o excluir un objeto de su alcance se les suele llamar zonas de certeza, positiva.

La transición entre ambos tipos de relaciones se realiza a través de un sector en el que la claridad y precisión se encuentran ausentes, razón por lo que es denominado halo del concepto o zona de incertidumbre colmar este espacio, implica reconocer un margen de apreciación de naturaleza cognoscitiva e interpretativa que sin embargo es incompatible con la libre voluntad del aplicador de la norma tal como la señala García (2012) (P. 460).

Esto es lo esencial del concepto jurídico indeterminado la indeterminación del enunciado no se traduce en una indeterminación de las aplicaciones del mismo las cuales solo permiten una unidad de solución justa en cada en cada caso a la que se llega mediante una actividad de cognición objetivamente por tanto y no de volición,

e).- Discrecionalidad

Uno de los objetivos del principio de legalidad ha sido siempre reducir al máximo las discrecionalidad de la administración estatal, que normalmente conlleva el ejercicio arbitrario del poder, cuando se ejerce sobre opciones de naturaleza y consecuencias diferentes la discrecionalidad es distinta a los

conceptos indeterminados y no debe confundirse con ellos en este orden de ideas:

Conceptos como urgencia orden público y hasta interés público no permiten en su aplicación una pluralidad de soluciones justas si no una sola solución en cada caso la que concretamente resulte de esa apreciación por juicios disyuntivos.

La formulación que trata de conciliar la legalidad con la oportunidad, concibiendo a esta como una excepción de aquella puede generar la idea de que la oportunidad implica en mayor o en menor grado, la desvinculación del fiscal de la ley autorizando el libre ejercicio de su voluntad para decidir ejercer o abstenerse de la acción penal.

Para sortear este inconveniente la relación (legalidad oportunidad) puede reconducirse, circunscribiendo la operatividad de la oportunidad a una dimensión específica del principio de la legalidad, en este caso la obligatoriedad de la acción penal.

En el contexto de la regulación anterior del principio de oportunidad era frecuente sostener que su aplicación significaba un ejercicio de facultades discrecionales del fiscal es decir de su libre albedrío como si la decisión de ejercer la acción penal fuera equivalente a su abstención y la decisión en uno y otro sentido no le importara al ordenamiento jurídico tal apreciación es incompatible con el diseño del NCPP.

f).- Mecanismo de Selección

Las premisas que forman el diseño del principio de oportunidad recogido en el NCPP, consiste en circunscribir su aplicación a un número limitado de conductas punibles.

Por lo tanto entre sus principales funciones se encuentra la identificación y selección de dichos supuestos en forma racional evitando que los propósitos a los que sirve pudieran enervar los fines de la pena de los que no cabe prescindir en la mayoría de casos.

g).- Plano Abstracto

En este caso la selección de los supuestos de hecho que el CP sancione sobre los que es posible aplicar el principio de oportunidad se efectúan a partir de la apreciación que realiza el legislador. Ex ante, en forma abstracta y genera a través de dos sistemas:

- a) El primero consiste en la numeración de un repertorio cerrado de conductas sancionadas penalmente frente a las cuales el fiscal está obligado a procurar la aplicación del principio de oportunidad, se trata de un sistema de *numerus clausus*
- b) Es posible sostener que este tipo de opción legislativa se encuentra animada por el propósito de garantizar la aplicación del principio de oportunidad en

aquellos delitos que se presentan con mayor frecuencias en la realidad y que no afectan bienes jurídicos especialmente sensibles

- c) La revisión de los delitos que en mayor número fueron denunciados ante el ministerio público en la ciudad de lima en el año 1999 y 2009 permite observar que el número total de denuncias ingresadas en el año 1999 fue de 29873 mientras que en el año 2009 se incrementó a 63561, un poco más del doble de casos por otra parte, a pesar de las fluctuaciones que caben esperarse puede observarse que existen alguna tendencia que se mantiene en el tiempo tales, como la preponderancia de los delitos contra el patrimonio la seguridad pública y la vida el cuerpo y la salud. Así mismo es razonable sostener que también pudieron ser incluidos como supuestos de aplicación automática del principio de oportunidad, en los delitos de conducción en estado de ebriedad y omisión a la asistencia familiar debido a su alta incidencia y a la naturaleza de bienes jurídicos involucrados en un caso.
- d) Uno de los motivos por lo que no ha sido aplicado con la regularidad esperada radica en el desconocimiento público que se tiene sobre la vigencia y alcance de esta norma, especialmente del imputado por un lado y por el otro lado en la falta de iniciativa del fiscal para sugerirla, debido fundamentalmente al temor que existe que tal actividad sea cuestionada en el futuro

- e) La norma a la que se refiere la cita es el artículo 2 del código procesal penal de 1991 que recogía el interior esquema del principio de oportunidad, su aplicación nos deja la siguiente enseñanza. Sin un sistema adecuado de información y de incentivos no será posible que la fiscalía prefiera y se esfuerce por conseguir el éxito de este tipo de alternativa al juicio oral.

1.2.8.- Conexión con el Sistema Penal

La segunda dimensión del plano abstracto correspondiente al mecanismo de selección de tipos legales compatibles con la aplicación del principio de oportunidad interactúa intensamente con el sistema de sanciones del código penal desnudando algunas de sus estructuras fundamentales

Tal como la señala Ferrajoli (1998), no existe criterio natural que permitan coordinar la entidad del delito con la pena que se le asigna, sino solo criterios pragmáticos basados en valoraciones ético políticas o de oportunidad para establecer la calidad y cantidad de la pena adecuada a cada delito: (P.395)

1.2.9.- Persecución del Delito

La ordenanza procesal penal alemana (StPO), constituye un referente muy importante a partir del cual es posible examinar algunas de las funciones que desempeña el interés público con referencia a la persecución del delito en este orden de ideas, dicho concepto sirve para:

- Diferenciar la acción penal de ejercicio privado de la ejercicio público a partir del contenido normativo del artículo 376 de la AtPO:
- La fiscalía solo interpondrá la acción pública debido a los delitos designados en 374 si es interés público
- Autorizar a las fiscalías pueda abstenerse del ejercicio de la acción penal aun sin la autorización del órgano jurisdiccional o del encausado, bajo el argumento de que el interés estatal en la persecución no existe por ejemplo tratándose de casos de criminalidad menor

Permitir que sea satisfecho a la acción penal a través de medidas diferentes a la incoación de la acción penal o la imposición de la pena por lo que puede ser atreves de pago de una indemnización voluntaria o de un cantidad de dinero a una institución de interés social con autorización del órgano jurisdiccional. (P. 235 – 253)

1.3.- Reglamento de Aplicación del Principio de Oportunidad y Acuerdo Reparatorio – 2018

A).- Que en el presente reglamento es una herramienta de gestión para la eficaz aplicación del principio de oportunidad y el Acuerdo Reparatorio en la investigación preliminar o diligencias preliminares conforme está previsto en el artículo 02 del código procesal penal.

B).- con el presente documento es asegurar la correcta aplicación del Principio de Oportunidad y el Acuerdo Reparatorio de acuerdo en lo

establecido en el código procesal penal, dando las pautas principales para el eficaz accionar de los fiscales en el marco de este principio.

C).- con la Aplicación del Principio de Oportunidad será de una manera obligatoria para las fiscalías provinciales penales, mixtas y de tránsito y seguridad vial en todo los Distritos Fiscales del País.

D).- El principio de oportunidad es un instrumento legal que faculta al fiscal a que discrecionalmente, en los casos previstos en la norma y con el consentimiento del imputado, pueda abstenerse de ejercitar la acción penal, ello sin perjuicio de procurar satisfacer íntegramente los intereses del agraviado, cuando corresponda.

Así mismo el acuerdo reparatorio es una herramienta procesal donde el fiscal de oficio, o a pedido del imputado o de la víctima propongan un acuerdo y conveniente, el fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal.

1.3.1.- La Base Legal del presente reglamento son las siguientes normas

- Constitución Política del Perú
- Decreto Legislativo N° 052 Ley Orgánica del Ministerio Público
- Decreto Legislativo N° 957, Código Procesal Penal y sus modificatorias.

1.4.- Delito de omisión a la asistencia familiar.-

1.4.1.- Antecedentes Históricos

En nuestra legislación peruana, el delito sub. estudio es introducido por sanción de la Ley N° 13906, del 24 de enero de 1962, designada comúnmente Ley de Abandono de Familia que incorporaba a nuestra legislación penal esta nueva y controversial – para algunos- figura delictiva; empero que, en honor a la verdad, con este mecanismo se encendía una luz de esperanza para los que obtuvieron una sentencia judicial que les fijaba un quantum por concepto de una pensión alimentaria, no alcanzaban cristalizar su natural intención de esperanza de vida, atentando así contra su seguridad. Esta Ley, amparara las obligaciones de asistencia familiar por un espacio de poco más de treinta años.

Más tarde, en el año de 1991, nuestros legisladores incluyen y unifican dentro de nuestro nuevo vigente Código Penal, el Título III, denominado Delitos contra la Familia, que en su Capítulo IV,

Artículos 149 y 150 se dedica al Delito de Omisión a la Asistencia Familiar.

Cabe destacar que los citados artículos recién entraron en vigencia con la dación del Decreto Legislativo N° 768 del año 1993, que deroga la Ley N° 13906.

En la actualidad aun cuando se tiene registrado hasta 5 Proyectos de Ley en la materia de estudio, hasta el momento el Congreso Nacional no ha emitido ninguna reforma al respecto, según lo expresado por CAMPANA (2002) (p. 24.)

1.4.2.- Asistencia familiar.-

Sin la noción de Asistencia Familiar es conversar del sujeto o sujetos autorizados de avalar, de manera natural e inexcusable, el sostenimiento de las condiciones mínimas materiales y del sustento y formación intrínsecos de cada integrante del círculo familiar, *para el autor Campana (2002): (p. 14), para comprender con mayor claridad el concepto de Asistencia familiar es necesario saber primero el concepto de alimentos*

Se entiende por alimentos todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. la pensión alimentaria asimismo está constituido por la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después, cuando no haya culminado su formación por causa que no le sea imputable. En las pensiones alimentarias se incorporara los gastos de embarazo y parto, en todo lo que no estén ocultos de nuestro modo. (3).

Frente a esto es necesario aludir que cuando el Juez de familia señalara al demandado conceder una pensión alimentaria de manera

mensual se sobreentiende que el emplazado debe conceder los medios necesarios para su subsistencia. En caso que la parte activa sea una mujer en la que se encuentre en un estado de gestación, el sujeto activo está obligado a una doble oblación, ya que al incumplir el deber interpuesto por el juez de familia pone en riesgo la salud y el bienestar de su cónyuge, así mismo el futuro de su descendiente. parte de la doctrina del derecho civil prescribe que el delito de omisión a la asistencia familiar nos menciona que no debería penalizarse si no debería mantenerse dentro del derecho civil, como ejemplo el caso de Beristain cuando afirma: "...la participación del Derecho Penal, desde el inicio del proceso, hasta el final de la ejecución de la pena no ayuda a perfeccionar un mejor nivel de posición económica del núcleo familiar, ni su unidad, ni su intimidad, para el autor

Campana (2002), p.35 , opina que lo que busca el sistema del

Derecho Penal en estos delitos, no es castigar al sujeto, sino garantizar la seguridad de los derechos fundamentales de la asistencia familia que les corresponde a cada miembro familiar.

1.4.3.- Delito de Omisión a la Asistencia Familiar.-

Al hacer referencia a los delitos de omisión a la asistencia familiar, nos estamos refiriendo a la falta del incumplimiento de la obligación de una pensión alimentaria al menor que lo necesita, ya sean hijos, cónyuge, de tal manera de que:

"El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial." de acuerdo al Código Penal. (C.P)

Haciendo referencia a este artículo citado anteriormente, prescribe en su segundo párrafo de la siguiente manera: *"Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en convivencia con otra persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo la pena será no menor de uno ni mayor de cuatro años. Si resulta lesión leve o muerte y estas pudieron ser previstas, la pena será no menos de tres ni mayor de seis años en caso de muerte", de acuerdo al Código Penal. (CP)*

Para las personas que excluyen otorgar una pensión alimentaria, dando a conocer que se les impide conceder por motivo de tener hijos con otra conviviente les hacemos recordar que tanto los hijos matrimoniales como los extramatrimoniales gozan de los mismos derechos y que, por lo tanto, también tienen derecho a percibir alimentos al igual que los hijos que se encuentran dentro del vínculo matrimonial, por tanto los padres están en la obligación de buscar la forma y los medios económicos de como satisfacer las necesidades y que todos sus hijos gocen de los mismos derechos que se les otorga.

1.4.4.- El Incumplimiento de las Pensiones Alimenticias como delito

Acota el Autor Laurence (2010). Que la familia supone una comunidad de personas vinculadas por lazos de consanguinidad, como elemento objetivo proveniente de la ley de la herencia biológica y, a la vez por vínculos de efectividad, como elemento subjetivo que se fundamenta en la consanguinidad y se retroalimenta de la convivencia continua. De allí que sea posible indicar que la familia no solo abarca a aquella que se denomina nuclear, en la que la pareja vive junta en unión de sus hijos, sino también a aquellas otras familias nominadas extensas en las que, además de la pareja casada o en convivencia y sus hijos viven otros parientes bien en el mismo hogar, bien en contacto íntimo y continuo

En tal sentido la familia, más que una definición jurídica, es un concepto sociológico que se regula jurídicamente en atención a la trascendencia social que supone y si bien la constitución reconoce tanto el matrimonio como a la familia, la regulación específica de tales como instituciones sociojurídicas viene dada por el derecho Civil, que señala los derechos y deberes de cada uno de sus miembros, poniendo énfasis en aquellos que merecen mayor protección a los hijos.

El amparo legal del hijo se extiende más allá de la protección que se le permite a la institución natural que lo posibilita, puesto que, aun ante la no existencia o desaparición de la instancia familiar, *los padres siguen obligados a ofrecer protección a los hijos y, ante la ausencia o*

desatención de aquellos, es el estado quien subsidiariamente asume tal función. Tal atención suplementaria se extiende a favor de la mujer, el anciano y la persona con discapacidad.

A los efectos de las obligaciones parentales de protección filial, no se exige, en consecuencia, la necesidad de una familia, basta el lazo de consanguinidad o en algunos casos la presunción de su existencia. El derecho internacional de los derechos humanos desea que los hijos crezcan en un ambiente de afecto y seguridad moral, pero la realidad no siempre coincide con los anhelos del Derecho, por ello, *la constitución impone como exigencia mínima el deber de los padres de alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos*, que no es más que la expresión jurídica de una obligación impuesta por la propia naturaleza de las cosas. (P. 111)

1.4.5.- Conductas Típicas de la Omisión a la Asistencia Familiar

Para el Autor Laurence (2010). Sin ánimo de agotar el análisis de los elementos objetivos y subjetivos del tipo, debemos reconocer que el artículo 149 del código penal contiene tres supuestos facticos distintos.

El primer párrafo contiene la conducta básica y supone la omisión al deber de prestar los alimentos.

La segunda conducta es una agravación de la primera, dado que no se trata solo del incumplimiento del demandado judicial, sino de la

realización de una o varias circunstancias específicas que faciliten dicho incumplimientos.

El párrafo segundo recoge tres formas a través de la realización de actos de falsedad simular otra obligación en connivencia con otra persona renunciar maliciosamente al trabajo y abandonar maliciosamente el trabajo todas ellas se materializan con el objeto de poner en condición de incapaz al obligado para cumplir sus obligaciones

El tercer supuesto factico aparece en el párrafo tercero y supone una agravación por un mayor desvalor del resultado la lesión grave o la muerte previsibles por el agente, del beneficiario o agraviado, que opera tanto para la conducta típica básica como para la formula agravada antes descrita.

A efectos del presente artículo nos centraremos en la conducta básica para la que se exige según el propio tenor del párrafo primero del artículo 149 del código penal:

- Que exista una resolución que ordene el pago de alimentos.
- Que el imputado omita el incumplimiento de dicha resolución, y
- Que exista dolo en dicho incumplimiento.

En la práctica no suele existir mayor dificultad en las dos primeras de las condiciones mencionadas, puesto que dada la adscripción de nuestro legislador al sistema estricto o francés, la realización del tipo requiere la existencia de una resolución judicial que ordene el pago de pensiones alimentarias o que reconozca el acuerdo conciliatorio arribado entre las partes en el seno de un proceso de alimentos en la vía civil.

Se discute si dicha resolución requiere haber alcanzado la calidad de firme y consentida en ese sentido, Reina (2005), precisa la exigencia de una decisión Judicial definitiva, mientras que para el autor Chirinos & Salinas (2000) y otros afirman que bastara la existencia de una resolución judicial admitiendo la punición en el caso de resoluciones que fijan provisionalmente pensiones vía proceso cautelar

Nuestra particular es posición es la de asegurar el derecho del beneficiario y dado que el tipo penal no lo exige bastara la existencia de una resolución judicial aun cuando esta se haya dictado un proceso cautelar o se encuentre en el plazo impugnatorio.

De igual modo, es de pacífica aceptación que el delito supone la omisión de los deberes alimentarios, la sustracción a la obligación o el incumplimiento de los pagos de las pensiones alimenticias, según lo fijado por el juez civil sin importar si existen o no pagos parciales de la obligación. Aun así, a la existencia de estos últimos puede influir en el elemento subjetivo del tipo el dolo

Existe el dolo en el incumplimiento cuando se ha acreditado pagos parciales al respeto, la corte suprema ha señalado:

Bien es cierto que los depósitos glosados evidencian que el acusado ha amortizado las pensiones a que estaba obligado con posterioridad al requerimiento judicial también lo es que dicha circunstancias denota que el agente en todo momento ha mostrado voluntad de cumplir con el manato judicial, lo que de ninguna manera cabe interpretarse como dolosa teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que en la conducta incriminada al acusado, no concurre el elemento subjetivo del tipo, el cual es el dolo, consecuentemente es atípica.

Consideramos la necesidad de evaluar cada caso específico puesto que si existen pagos parciales de los alimentos de modo retirado es

porque en la vía civil no se evaluó adecuadamente la situación económica del obligado, situación que no puede ser calificada por el juez penal a quien corresponde verificar si se cumple a cabalidad con asegurar el derecho del alimentista a la pensión de alimentos establecidas por un juez de la materia cosa distinta ocurrirá si dicha contingencia la de los pagos parciales corresponde a una situación sobreviniente a la sentencia civil y contemporánea al incumplimiento del pago enfermedad del obligado, pérdida del trabajo, condiciones económicas sociales adversas, (P. 113)

1.4.6.- El Incumplimiento del pago en el caso del hijo que adquiere

Compromiso de convivencia con tercera persona

Según el Autor Laurence (2010). En el análisis de los elementos del delito, nos preguntamos cómo deberá entenderse la situación jurídica de un imputado que se sustrae a su obligación de prestar alimentos argumentando que su menor hijo a decidido en contra de su voluntad de los padres) entrar en relación de convivencia fáctica con otra persona, para cuyo efecto huye de la casa familiar, se trata de un acto atípico por ausencia de dolo o es que existe una causa de justificación,

Nos discutimos la existencia de una resolución judicial o el incumplimiento del pago de las pensiones los cuales se presumen

probados en juicio sino si la conducta omisiva del imputado, bajo las circunstancias del compromiso convivencial del beneficiario, supone ausencia de dolo.

La expresión del imputado podría ser la siguiente sabía que había un mandato judicial pero lo cierto es que mi hijo, pese a nuestros consejos, se fue de la casa a vivir con una chica, por, lo que entendí que allí termino la obligación, debiendo el asumir no solo su manutención sino también la de su pareja.

Así mismo podemos indicar que si el imputado por el delito de omisión a la asistencia familiar artículo 149 del Código penal hallara una causa de justificación de su omisión, quedaría liberado de responsabilidad, por cuanto su actuación seria conforme al derecho y si su actuación pública permite suponer que no requiere de la asistencia familiar del padre, este queda exonerado de dicha obligación. (P. 113 – 120)

a).- Pleno Jurisdiccional de Arequipa (14-12-07)

Para el Autor Gonzalo (2013). CP Art. 149, Que el delito de Omisión a la Asistencia Familiar es un delito instantáneo, la problemática se sustentó básicamente en la diferencia de estos conceptos, ¿es un delito instantáneo, continuado o permanente? Para la cual se recurrió a lo que estableció en el pleno jurisdiccional

de Ica 1998 en donde se consideró la calificación de estos tres tipos de delitos: es instantáneo si se tratad de hechos

consumados en un solo acto, independientemente de la permanencia que muestren sus efectos, es continuado si el hecho consiste en varias infracciones a la ley que responde a una misma acción criminal: y es permanente si producida la consumación esta se mantiene en el tiempo durante un periodo determinado por la voluntad del agente. La omisión es un delito instantáneo pero con efectos permanentes y que prescribe.

b).- Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Penal 2007

Cajamarca

Que en los procesos por omisión a la asistencia familiar, al momento de establecer la medida de detención o comparecencia, se tenga en cuenta elementos como: el interés superior del niño y la posibilidad efectiva de que a través del proceso penal se le brinde protección al menor

c).- Expediente 1049 -2017 Lima IVSP Reos Libres.

Que conforme a su descripción típica el delito contra la familia en su modalidad de omisión a la asistencia familiar requiere para su configuración un comportamiento del agente

consistente en omitir el cumplimiento de la prestación de alimentos establecidas en una resolución judicial, esto es incumplir sus deberes legales de asistencia, no requiriéndose de la acusación de un perjuicio efectivo, siendo suficiente la sola puesta en peligro del bien jurídico.

Protegido;

d).- Rojas Vargas Fidel, Op. cit. p 495 (Exp. 2399-00 Lima 21-09-00), SPSP Reos libres.

Todo proceso penal debe contener las garantías procesales mínimas que configuran el debido proceso por lo que, a efectos de asegurar al ciudadano su derecho a un juicio justo, con antelación se le debe notificar las resoluciones judiciales que se expiden y que puedan afectar sus intereses, que, reiteradas ejecutorias inciden en que previamente a la formalización de denuncia penal por el delito de omisión a la asistencia familiar se debe verificar que el demandado fue debidamente notificado de las resoluciones que lo requerían para que cumpla con sus obligaciones, bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente,

e).- Exp. 600-98-Lima SPSs.

Que en el comportamiento en el ilícito instruido consiste en omitir el cumplimiento de la prestación de alimentos establecida, por una resolución judicial, es decir basta con dejar de cumplir la obligación para realizar el tipo, teniendo en consideración que el bien jurídico protegido es la familia y específicamente los deberes de tipo asistencial. (P. 152)

1.4.7.- Omisión de Prestación de Alimento

Acota el Autor Muños (1999). Que Antiguamente, el cumplimiento de la obligación de prestar alimentos establecida por mandato judicial se contempla en los fueros civiles. En los tiempos modernos, incluso antes de la vigencia del presente código penal, se introduce en la legislación penal por medio de la Ley N° 13906. La razón por la que este hecho pasa a regularse por el derecho penal se debe. Fundamentalmente, a que el incumplimiento de los deberes alimentarios ponía, en la mayoría de casos, en peligro la vida y la salud de algunas personas. A esto se une que en la actualidad la familia se convierte en el núcleo básico de la sociedad en la que vivimos

Por lo que es necesario precisar que el bien jurídico, puesto que no se protege toda la familia, si no, específicamente, deberes de tipo asistencial, donde prevalece aún más la idea de seguridad de las personas afectadas. (P. 175)

Según El Autor Serrano (2004), *nos da a conocer de que* “Dentro del Bien jurídico tutelado destaca la protección de la familia en cuanto a los derechos y obligaciones que le son inherentes como miembro de la misma.

Para el Autor Salinas, (2000). *En donde indica* “que el delito de omisión de asistencia familiar se constituye en un ejemplo representativo de los delitos de omisión propia. El agente omite cumplir sus deberes legales de asistencia alimenticia, pese a que existe una resolución judicial que así lo ordena. El autor de este delito omite realizar lo que se le exige a través de una orden judicial, esto es, prestar alimentos al agraviado”

(P.116)

Según el Autor Muños (1999). *Explica que* “que en este delito solo es punible la comisión dolosa del mismo, por tanto, es preciso que el sujeto sepa que tiene obligación de realizar los pagos y que, sin embargo, no quiera hacerlo, pero obviamente, es necesario que esas obligaciones estén ya previamente establecidas. (P. 474)

2.1.- OBJETIVOS

2.1.1.- Objetivo General

- ✚ Determinar la eficacia en la aplicación del principio de oportunidad en los delitos de omisión a la asistencia familiar, en la solución de los conflictos referentes a la carga procesal en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de

Huamachuco - Provincia de Sánchez Carrión, durante el 2014 al 2018.

- ✚ Identificar la influencia que se da con los encargados de Administrar Justicia y al no motivar sobre la Aplicación del Principio de Oportunidad en el delito de omisión a la asistencia familiar referentes a la carga procesal en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huamachuco - Provincia de Sánchez Carrión, durante el 2014 al 2018.

2.1.2.- Objetivos Específicos

- ✚ Analizar el principio de oportunidad en los delitos de omisión a la asistencia familiar, en la legislación peruana.

- ✚ Analizar el principio de oportunidad en la legislación comparada.

- ✚ Analizar la doctrina sobre la gran importancia del principio de oportunidad en la Administración de Justicia.

3.1.- DISEÑO DE CONTRASTACION

3.1.1.- Material u Objeto de Estudio

3.1.2.- Población

La población de estudio está conformada por los procesos penales sobre el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huamachuco - Provincia de Sánchez Carrión durante los años 2014 – 2018.

3.1.3.- Muestra

La muestra está conformada por los procesos culminados en la Aplicación del Principio de Oportunidad en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huamachuco - Provincia de Sánchez Carrión 2014 – 2018.

N° 01 FISCALIA PROVINCIAL MIXTA C. DE SANCHEZ CARRION	TOTAL
1° FISCAL Adjunto 1	03
2° FISCAL Adjunto 2	06
3° FISCAL Provincial 1	04
4° FISCAL Provincial 2	04
5° FISCAL Coordinador	03
TOTAL CASOS RESUELTOS	20

4.1.- Métodos y Técnica

Técnicas

Para el trabajo de investigación se ha adoptado por la encuesta como la técnica de recojo de información del método Hipotético Deductivo porque se ha realizado todo el procedimiento para hacer una práctica científica. Se ha observado el conflicto penal respecto al delito de omisión a la asistencia familiar para explicarlo mediante la verificación o comprobación en la hipótesis planteada y comparándola con la experiencia este método oblige a cambiar la reflexión racional o momento racional la formación de hipótesis y la deducción con la observación de la realidad o momento empírico la observación y la verificación

5.1.- Análisis y Procedimiento de los Datos

Para la análisis de la información del procesamiento y la presentación de data se utilizara los estadígrafos pertinentes y las medidas estadísticas correspondientes para tener el análisis de los datos que se recolectaran y se elaborara en una base de datos por la cual se procesara aplicando el Software estadístico SPSS Ur 24 en donde se presentara en tabla simple y doble entrada como también será presentado en tablas y figuras de acuerdo a las variables

6.1.- Operacionalización de Variables

Variables Independientes

- **Aplicación del Principio de Oportunidad**

Variable Dependiente

- **El Delito de Omisión a la asistencia Familiar**

III.- RESULTADOS

Se logró tener un resultado muy importante y según las opiniones de los fiscales y abogados han señalado que los procesos de Omisión de Asistencia Familiar debería de concluir de una manera rápida con el acuerdo, y sobre todo la agraviada puede recibir el pago de sus pensiones devengadas de una manera rápida y eficaz, como también al demandado ya no le genera los antecedentes penales,

IV.- DISCUSION

Vamos a discutir que aplicar el principio de oportunidad en el delito de omisión a la asistencia familiar si soluciona el conflicto penal como también se logra determinar una afirmación correcta de que con el acuerdo reparatorio les facilita de una manera rápida a la denunciante de que pueda cobrar su liquidación correspondiente como también al imputado ya no le genera los antecedentes y a los encargados de administrar justicia le ayuda a terminar el proceso con la abstención del ejercicio de la acción penal. Y para respaldar esta afirmación logro indicar que el principio de oportunidad es la facultad que el titular de la acción penal en donde asiste para disponer bajo determinadas condiciones de su ejercicio con independencia de que se haya acreditado la existencia de un hecho punible contra un autor determinado.

V.- PROPUESTA OPCIONAL

Se debe de dar charlas a los encargados de administrar justicia cada tres meses como también a las partes del proceso para que de una manera acelerada puedan solicitar

este principio a dichos casos penales y aplicar el principio de oportunidad en el delito de omisión a la asistencia familiar y así se pueda solucionar de una manera rápida y eficaz el conflicto que se genera de padres a hijos que hoy en día se presenta en diferentes Ministerios Públicos de nuestro país ya que con la aplicación del principio de oportunidad se lograría dar solución a este problema que se presenta en los diferentes hogares

VI.- CONCLUSIONES

Así mismo se concluye que en pocos de los procesos de omisión a la asistencia familiar se aplican el principio de oportunidad, y por otro lado es por falta de dinero del imputado, y en la mayoría de las personas indican que no logran solicitar por desconocimiento de este principio.

VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFIA

ARMENTA DEU. Teresa. (1991), *Criminalidad de bagatela y principio de oportunidad: Alemania y España, pdu– España.*

CONDE & PUMPIDO, Ferreiro, (1983) *Legalidad versus oportunidad como criterios de actuación de los ministerios públicos. En: primeras jornadas de derecho judicial, España.*

CARHUAYANO DIAZ, 2017, *El delito de incumplimiento de Obligación Alimentaria y su influencia en la aplicación del principio de oportunidad lima Perú*

MONAGO COLLAZOS. (2015), *El delito de incumplimiento de obligación alimentaria y la carga procesal en la segunda fiscalía provincial penal corporativa de Huánuco.*

CAMPANA VALDERRAMA Manuel (2002), *el delito de omisión a la asistencia familiar fondo editorial universidad inca Garcilaso de la Vega Lima.*

CAYRO CARI. Rubén (2011), *es la Omisión a la Asistencia Familiar un delito instantáneo Tendencias Jurisprudencias adversa a los derechos del niño y del adolescente.*

TORRES GONZALES, Eduardo, (2010), *El delito de Omisión a la Asistencia Familiar limas*

SANTA VEGA Dulce María, (1994) *Principio de Oportunidad y Sistema Penal en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales.*

SANTA VEGA ADPCP, (1994), *Existencia de una Negociación o de un Acuerdo*

PEREZ SANZBERRO, Guadalupe. (1999), *Reparación y Conciliación en el*

sistema penal apertura de una nueva vía comares granada.

SERRANO (2004) *Derecho Penal/ parte especial 9ª ed. Dykinson Madrid, p. 328.*

SALINAS SICCHA, R. (2000). *Curso de Derecho Penal Peruano parte*

especial. Palestra Editores Lima P. 116. En donde indica “

MUÑOZ CONDE, F. (1999). *Derecho Penal/ parte especial Tirand lo Blanch.*

Valencia, p. 301.